

Boletín



Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

ADVERTENCIA OFICIAL.

Las leyes y disposiciones generales del Gobierno, son obligatorias para cada capital de provincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 23 de Noviembre de 1837.)—Las disposiciones de las autoridades, excepto las que sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente, como asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio de la Nación que dimanase de las mismas, pero los de interés particular pagarán su inserción, entendiéndose en este último caso con el Editor del Boletín.

PRECIOS DE SUSCRICION.—En Orense, por trimestres, **5 pesetas**.—Para fuera de esta capital, franco de porte por trimestres adelantados, **7 pesetas**.—Números sueltos, **38 céntimos**.

SE PUBLICA los martes, jueves y sábados de cada semana.

SE SUSCRIBE en esta capital, *Imprenta de D. Gregorio Rionegro Lozano y C.*, Plaza del Hierro núm. 3.—En las demás provincias, en las principales librerías.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

SECCION DE FOMENTO.

Se anuncia la subasta de sesenta y seis pinos del monte comunal del pueblo de Sadurnin en el Ayuntamiento de Cenlle y la de diez y nueve robles del monte del Estado, sito en Gestosa, Ayuntamiento de Toén.

Conforme á lo prevenido en los arts. 94, 96 y 97 del reglamento de 17 de mayo de 1865, y con arreglo á las condiciones que á continuacion se insertan, tendrá lugar á las doce del día 13 de enero próximo la subasta de sesenta y seis pinos fraudulentamente cortados en el monte comunal de Sadurnin, bajo el tipo de 8 pesetas, y la de diez y nueve robles del monte del Estado, sito en el pueblo de Gestosa, bajo el tipo de 25 pesetas, cuya subasta se efectuará ante los respectivos Alcaldes, Procuradores y Secretarios de los respectivos Ayuntamientos de Cenlle y Toén, con presencia de un empleado del ramo de Montes.

Orense 12 de diciembre del 1870.
—El Gobernador, José Casal.

Pliego de condiciones que ha de servir de base para la subasta de los árboles que expresa el precedente anuncio.

1.ª No se admitirá postura menor de la cantidad de tasacion.

2.ª El rematante no podrá extraer los efectos subastados hasta que el guarda del partido le haga entrega de los mismos.

3.ª Para que tenga efecto la condicion anterior, deberá preceder la presentacion de la correspondiente carta de pago que el rematante de los primeros haya obtenido de su respectiva depositaria municipal y de la Tesorería de provincia el de estos.

4.ª La extraccion de los árboles subastados ha de verificarse en el preciso término de un mes, á contar desde el día siguiente al en que haya sido aprobado por el Sr. Gobernador el remate.

DIPUTACION PROVINCIAL.

Negociado 4.º.—Beneficencia.

Esta corporacion por acuerdo de 1.º del corriente creó una plaza de farmacéutico de los Establecimientos de Beneficencia de esta capital con el sueldo anual de mil quinientas pesetas y prohibicion al que la desempeñe de tener abierta botica propia, regentarla de otro y despachar para el público en la de Beneficencia. El farmacéutico tendrá á su disposicion, pagado por la provincia, un mozo para el servicio de la botica.

Los aspirantes presentarán en esta Secretaria sus solicitudes acompañadas de sus respectivos títulos ó copias legalizadas de los mismos en el término de 15 días, contados desde la insercion del presente anuncio en el Boletín oficial.

Orense 8 de Diciembre de 1870.

—E. G. P., José Casal.—Por acuerdo de la Diputacion. Claudio Fernandez, Srio.

REGENCIA DEL REINO.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

EXPOSICION.

Señor: Promulgada la ley de 21 de diciembre último autorizando al Gobierno para llevar á efecto la reforma de la ley hipotecaria de 8 de febrero de 1861 con arreglo al proyecto aprobado por las Cortes, el Ministro que suscribe dictó desde luego las disposiciones necesarias para el mas pronto planteamiento posible de tan importante resolucion.

Para llevarla á cabo era de todo punto indispensable formar un reglamento general que, modificando en lo necesario el de 12 de junio de 1861, desentendiéndose las prescripciones alteradas ó adicionadas por la nueva ley, y utilizando la jurisprudencia establecida durante el período en que ha regido la anterior, fuese el natural complemento de aquella y la hiciese practicable sin dudas ni complicaciones.

En la formacion de dicho reglamento, que no podia menos de ser precedida de un estudio concienzudo y de detenidas discusiones, se ha invertido el tiempo

que se nota y que fué absolutamente necesario, por lo grave y trascendental de las alteraciones que abraza la reforma, por la necesidad de oír al Consejo de Estado, y por las variaciones que la ley orgánica del poder judicial ha hecho en la denominacion y atribuciones de algunos funcionarios llamados á intervenir en ciertas actuaciones y en la inspeccion del Registro de la propiedad, variaciones que no podian dejar de adoptarse tambien en la legislacion hipotecaria reformada.

Esta necesaria tardanza, sin embargo, no habrá dejado de ser conveniente para aquellos que, siendo dueños de bienes ó derechos reales en virtud de títulos anteriores al 1.º de enero de 1863, no los hubiesen inscrito en el Registro, como lo será tambien el tiempo que todavía ha de mediar hasta que empiece á regir la nueva ley. Fijado en ella el plazo de 180 días para la inscripcion de dichos títulos con efecto retroactivo y otros beneficios que la misma expresa, poniendo término de este modo al período transitorio que aun subsiste en virtud del real decreto de 19 de diciembre de 1865, los interesados han podido utilizar el tiempo hasta ahora transcurrido desde la promulgacion de la ley, y podrán igualmente aprovechar el que ha de transcurrir hasta la fecha en que comience su observancia, desde la cual se han de empezar á contar los referidos 180 días. De modo que la dilacion, no solamente ha sido necesaria, sino que bajo este punto de vista ha sido conveniente.

Terminado el reglamento, al que se ha dignado V. A. prestar su aprobacion por decreto de este día, cree el Ministro que suscribe que se está en el caso de disponer lo necesario para el planteamiento de la expresada reforma.

Con este objeto tiene la honra de someter á V. A. el adjunto proyecto de decreto, que contiene tres prescripciones. La primera, fijando el día en que deben empezar á regir la ley y reglamento referidos, y como tal el 1.º de Enero próximo, época que parece muy á propósito para el caso por ser principio de año, y porque deja un espacio aproximado de dos meses, que podrán aprovechar, no solo los propietarios, segun queda indicado, sino tambien los encargados de aplicar la reforma, estudiándola convenientemente y preparando los medios necesarios para su ejecucion. La segunda, mandando que se haga una edicion oficial, que será la única auténtica, de la nueva ley y reglamento del mismo modo que se verificó en 1861, sin perjuicio de que se inserten tambien en la Gaceta de Madrid y en los Boletines oficiales de las provincias en esta disposicion se añade

que la denominacion de los funcionarios llamados á intervenir en la ejecucion de la ley se acomode á la establecida en la que recientemente se ha dictado sobre organizacion del poder judicial. Y en la tercera se previene que, en vista de esta indispensable aunque ligera alteracion del texto primitivo de dicha ley hipotecaria, se dé cuenta á las Cortes de este decreto en justo respeto á su autoridad.

Por tales consideraciones, el Ministro que suscribe somete á V. A. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 29 de Octubre de 1870.—Eugenio Montero Rios.

DECRETO.

Usando de la autorizacion concedida al Gobierno para llevar á efecto la reforma de la ley hipotecaria de 8 de febrero de 1861, y conformándose con lo propuesto por el Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros,

Como Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º La ley hipotecaria de 21 de diciembre de 1869 y el reglamento general para su ejecucion, aprobado por mi decreto de esta fecha, empezarán á regir en la Península é islas adyacentes el día 1.º de enero de 1871.

Art. 2.º Por el Ministerio de Gracia y Justicia se dictarán las disposiciones necesarias para que se haga una edicion oficial de dicha ley y reglamento, y para que se publiquen en la Gaceta de Madrid y en los Boletines oficiales de las provincias, adoptándose para los funcionarios llamados á intervenir en su ejecucion la denominacion establecida en la ley orgánica del poder judicial.

Art. 3.º De este decreto se dará cuenta á las Cortes.

Madrid veintinueve de octubre de mil ochocientos setenta.—Francisco Serrano.
—El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.

LEY HIPOTECARIA.

TITULO PRIMERO.

De los títulos sujetos á inscripcion.

Artículo 1.º Subsistirán los Registros de la propiedad inmueble en todos los pueblos en que se hallan establecidos. No podrán suprimirse ni crearse Registros sino por una ley. Para alterarse la circunscripcion territorial que en la actualidad corresponde á cada Registro, deberá existir motivo de necesidad ó conveniencia pública que se hará constar en expediente, y será oído el Consejo de Estado.

Art. 2.º En los Registros expresados en el artículo anterior se inscribirán:

Primero. Los títulos traslativos del dominio de los inmuebles ó de los derechos reales impuestos sobre los mismos.

Segundo. Los títulos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen ó extingan derechos de usufructo, uso, habitación, enfiteusis, hipotecas, censos, servidumbres y otros cualesquiera reales.

Tercero. Los actos ó contratos en cuya virtud se adjudiquen á alguno bienes inmuebles ó derechos reales, aunque sea con la obligación de transmitirlos á otro ó de invertir su importe en otros determinados.

Cuarto. Las ejecutorias en que se declare la incapacidad legal para administrar, ó la presunción de muerte de personas ausentes, se imponga la pena de interdicción ó cualquiera otra por la que se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto á la libre disposición de sus bienes.

Quinto. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un periodo que exceda de seis años, ó los en que se hayan anticipado las rentas de tres ó mas años, ó cuando sin tener ninguna de estas condiciones hubiere convenio expreso de las partes para que se inscriban.

Sexto. Los títulos de adquisición de los bienes inmuebles y derechos reales que poseen ó administran el Estado ó las corporaciones civiles ó eclesiásticas, con sujeción á lo establecido en las leyes ó reglamentos.

Art. 3.º Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo anterior deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria ó documento auténtico, expedido por autoridad judicial ó por el Gobierno ó sus agentes, en la forma que prescriben los reglamentos.

Art. 4.º No se consideran bienes inmuebles para los efectos de esta ley los oficios públicos enajenados de la Corona, las inscripciones de la Deuda pública, ni las acciones de Bancos y Compañías mercantiles, aunque sean nominativas.

Art. 5.º También se inscribirán en el Registro los documentos ó títulos expresados en el art. 2.º, otorgados en país extranjero que tengan fuerza en España con arreglo á las leyes, y las ejecutorias de la clase indicada en el número cuarto del mismo artículo, pronunciadas por Tribunales extranjeros á que deba darse cumplimiento en el reino con arreglo á la ley de Enjuiciamiento civil.

TTULO II.

De la forma y efectos de la inscripción.

Art. 6.º La inscripción de los títulos en el Registro podrá pedirse indistintamente:

- Por el que trasmita el derecho.
- Por el que lo adquiera.
- Por quien tenga la representación legítima de cualquiera de ellos.
- Por quien tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir.

Art. 7.º Cuando en los actos ó contratos no sujetos á inscripción se reserve cualquier derecho real sobre bienes inmuebles á personas que no hubieran sido parte en ellos, el Notario que autorice el título, ó la autoridad que lo espida si no mediare aquel funcionario, deberá exigir la inscripción del referido derecho real siempre que el interés de dichas personas resulte del título mismo ó de los documentos ó diligencias que se hayan tenido á la vista para su expedición.

Si los actos ó contratos estuvieren sujetos á inscripción, deberá hacerse en esta expresa mención del derecho real reservado y de las personas á cuyo favor se hubiere hecho la reserva.

Art. 8.º Cada una de las fincas que se inscriban por primera vez se señalará con número diferente y correlativo.

Las inscripciones correspondientes á cada finca se señalarán con otra numeración correlativa y especial.

Se considerarán como una sola finca para el efecto de su inscripción en el Registro bajo un solo número:

Primero. El territorio, término redondo ó lugar de cada foral en Galicia ó Asturias, siempre que reconozca un solo dueño directo, ó varios *pro indiviso*, aunque esté dividido en suertes ó porciones dadas en dominio útil ó furo á diferentes colonos, si su conjunto se halla comprendido dentro de los linderos de dicho término.

Segundo. Toda finca rural dividida y dada del mismo modo en enfiteusis, siempre que concurren en ella las demás circunstancias expresadas en el párrafo anterior.

Se estimará único el señorío directo para los efectos de la inscripción, aunque sean varios los que, á título de señores directos, cobren rentas ó pensiones de un foral ó lugar, siempre que la tierra aforada no se halle dividida entre ellos por el mismo concepto.

Tercero. Toda finca urbana y todo edificio aunque pertenezca en porciones señaladas, habitaciones ó pisos á diferentes dueños, en dominio pleno ó menos pleno.

Art. 9.º Toda inscripción que se haga en el Registro expresará las circunstancias siguientes:

Primera. La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción, ó á los cuales afecte el derecho que deba inscribirse, y su medida superficial, nombre y número si constaren del título.

Segunda. La naturaleza, extensión, condiciones y cargas de cualquiera especie del derecho que se inscriba, y su valor si constare del título.

Tercera. La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho sobre el cual se constituya el que sea objeto de la inscripción.

Cuarta. La naturaleza de título que deba inscribirse y su fecha.

Quinta. El nombre y apellido de la persona si fuese determinada; y no siéndolo, el nombre de la corporación ó el colectivo de los interesados á cuyo favor se hace la inscripción.

Sexta. El nombre y apellido de la persona, ó el nombre de la corporación ó persona jurídica de quien procedan inmediatamente los bienes ó derechos que deban inscribirse.

Sétima. El nombre y residencia del Tribunal, Notario ó funcionario que autorice el título que se haya de inscribir.

Octava. La fecha de la presentación del título en el Registro, con expresión de la hora.

Novena. La conformidad de la inscripción con la copia del título de donde se hubiere tomado; y si fuere éste de los que deben conservarse en el oficio del Registro, indicación del legajo en que se encuentre.

Art. 10. En la inscripción de los contratos en que haya mediado precio ó entrega de metálico se hará mención del que resulte del título, así como de la forma en que se hubiere hecho ó convenido el pago.

Art. 11. Si la inscripción fuere de traslación de dominio, expresará si está se ha verificado pagando el precio al contado ó á plazos; en el primer caso si se ha pagado todo el precio ó qué parte de él, y en el segundo la forma y plazos en que se haya estipulado el pago.

Iguales circunstancias se expresarán también si la traslación de dominio se verificare por permuta ó adjudicación en pago, y cualquiera de los adquirentes quedare obligado á abonar al otro alguna diferencia en metálico ó efectos.

Art. 12. Las inscripciones hipotecarias de créditos expresarán en todo caso el importe de la obligación garantida y el de los intereses si se hubieren estipulado, sin cuya circunstancia no se consideraran asegurados por

la hipoteca dichos intereses en los términos prescritos en la presente ley.

Art. 13. Las inscripciones de servidumbre se harán constar:

Primero. En la inscripción de propiedad del predio sirviente.

Segundo. En la inscripción de propiedad del predio dominante.

Art. 14. La inscripción de los fideicomisos se hará á favor del heredero fiduciario si oportunamente no declarare con las formalidades deudas el nombre de la persona á quien hayan de pasar los bienes ó derechos sujetos á inscripción.

Si fuere el fiduciario aquella declaración, se verificará la inscripción desde luego á nombre del fideicomisario.

Art. 15. Las inscripciones de las ejecutorias mencionadas en el número cuarto del art. 2.º y en el art. 5.º de esta ley, y las anotaciones preventivas de las demás á que se refiere el número quinto del art. 42, expresarán claramente en ella la especie de incapacidad que de dichas ejecutorias ó demandas resulte.

Art. 16. El cumplimiento de las condiciones suspensivas, resolutorias ó rescisorias de los actos ó contratos inscritos se hará constar en el Registro, bien por medio de una nota marginal, si se consuma la adquisición del derecho, ó bien por una nueva inscripción á favor de quien correspondiere, si la resolución ó rescisión llega á verificarse.

También se hará constar por medio de una nota marginal, siempre que los interesados lo reclamen ó el Juez ó el Tribunal lo mande, el pago de cualquiera cantidad que haga el adquirente después de la inscripción por cuenta ó saldo del precio en la venta, ó de abono de diferencias, en la permuta ó adjudicación en pago.

Art. 17. Inscrito ó anotado preventivamente en el Registro, cualquier título traslativo del dominio de los inmuebles, no podrá inscribirse ó anotarse ningún otro de fecha anterior por el cual se trasmita ó grave la propiedad del mismo inmueble.

Si sólo se hubiere extendido el asiento de presentación del título traslativo del dominio, no podrá tampoco inscribirse ó anotarse ningún otro título de la clase antes expresada durante el término de treinta días, contados desde la fecha del mismo asiento.

Art. 18. Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de las escrituras en cuya virtud se solicite la inscripción, y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas escrituras.

Art. 19. Cuando el Registrador notare falta en las formas extrínsecas de las escrituras, ó de capacidad en los otorgantes, la manifestará á los que pretendan la inscripción para que, si quieren, recojan la escritura y subsanen la falta en el término que duran los efectos del asiento de presentación, según el art. 17; y si no recojan la escritura ó no subsanan la falta á satisfacción del Registrador, devolverá el documento para que puedan ejecutarse los recursos correspondientes, sin perjuicio de hacer la anotación preventiva que ordena el art. 42 en su número octavo si se solicita expresamente.

En el caso de no hacerse la anotación preventiva, el asiento de presentación del título continuará produciendo sus efectos durante los treinta días á los expresados.

Art. 20. El no hallarse inscrito el dominio de un bien inmueble ó derecho real á favor de la persona que lo trasfiera ó grave, sin estar tampoco inscrito á favor de otra, no será motivo suficiente para suspender la inscripción ó anotación preventiva si del título presentado ó de otro documento fehaciente resulta probado que aquella persona adquirió el referido dominio antes del día 1.º de Enero de 1863; pero en el asiento solicitado se expresarán

las circunstancias esenciales de tal adquisición, tomándolas de los documentos necesarios al efecto.

En el caso de no resultar la fecha de la adquisición, ó de ser posterior al expresado día 1.º de Enero de 1863, se suspenderá la inscripción solicitada, tomándose anotación preventiva si lo pidiere el que presente el título, cuya anotación subsistirá el tiempo designado en el artículo 96, y en el caso de no tomarse dicha anotación producirá el asiento de presentación el efecto designado en el artículo 17.

Art. 21. Las escrituras públicas de actos ó contratos que deban inscribirse expresarán por lo menos todas las circunstancias que bajo pena de nulidad debe contener la inscripción, y sean relativas á las personas de los otorgantes, á las fincas y á los derechos inscritos.

Los dueños de bienes inmuebles ó derechos reales por título de mayorazgo, testamento ó otro universal ó singular que no los señale y describa individualmente podrán obtener su inscripción presentando dicho título con el documento en su caso que pruebe haberles sido aquel transmitido, y justificando con cualquier otro documento fehaciente que se hallan comprendidos en él los bienes que traten de inscribir.

Art. 22. El Notario que cometiere alguna omisión que impide inscribir el acto ó contrato conforme á lo dispuesto en el artículo anterior, la subsanará extendiendo á su costa una nueva escritura, si fuere posible, é indemnizando en todo caso á los interesados de los perjuicios que les ocasione su falta.

Art. 23. Los títulos mencionados en los arts. 2.º y 5.º que no estén inscritos en el Registro no podrán perjudicar á tercero.

La inscripción de los bienes inmuebles y derechos reales adquiridos por herencia ó legado no perjudicará á tercero sino hubiesen transcurrido cinco años desde la fecha de la misma.

Art. 24. Los títulos inscritos surtirán su efecto aun contra los acreedores singularmente privilegiados por la legislación común.

Art. 25. Los títulos inscritos no surtirán su efecto en cuanto á tercero sino desde la fecha de la inscripción.

Art. 26. Para determinar la preferencia entre dos ó más inscripciones de una misma fecha, relativas á una misma finca, se atenderá á la hora de la presentación en el Registro de los títulos respectivos.

Art. 27. Para los efectos de esta ley, se considera como tercero aquel que no haya intervenido en el acto ó contrato inscrito.

Art. 28. Se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que esta debe producir la fecha del asiento de presentación, que deberá constar en la inscripción misma.

Art. 29. El dominio ó cualquier otro derecho real que se mencione expresamente en las inscripciones ó anotaciones preventivas, aunque no esté consignado en el Registro por medio de una inscripción separada y especial, surtirá efecto contra tercero desde la fecha del asiento de presentación del título respectivo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la obligación de inscribir especialmente los referidos derechos y de la responsabilidad en que pueda incurrir la persona que en casos determinados deba pedir la inscripción.

Art. 30. Las inscripciones de los títulos expresados en los arts. 2.º y 5.º, á excepción del de hipoteca, serán nulas cuando carezcan de las circunstancias comprendidas en los números primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo del art. 9.º, y en el número primero del art. 13.

Las inscripciones de hipotecas serán nulas cuando carezcan de las circunstan-

cias expresadas en los números primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y octavo del mismo art. 9.º

Art. 31. La nulidad de las inscripciones, de que trata el artículo precedente no perjudicará al derecho anteriormente adquirido por un tercero que no haya sido parte en el contrato inscrito.

Art. 32. Se entenderá que carece la inscripción de algunas de las circunstancias comprendidas en los números y artículos citados en el art. 30 no solamente cuando se omita hacer mención en ella de todos los requisitos expresados en cada uno de los mismos artículos ó números, sino también cuando se expresen con tal inexactitud, que pueda ser por ello el tercero inducido á error sobre el objeto de la circunstancia misma y perjudicado además en su consecuencia.

Cuando la inexactitud no fuese sustancial, conforme á lo prevenido en el párrafo anterior, ó la omisión no fuese de todas las circunstancias comprendidas en alguno de los referidos números ó artículos, no se declarará la nulidad sino en el caso de que llegue á producir el error y el perjuicio.

Art. 33. La inscripción no convalida los actos ó contratos que sean nulos con arreglo á las leyes.

Art. 34. No obstante lo declarado en el artículo anterior, los actos ó contratos que se ejecuten ó otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto á tercero, aunque después se anule ó resuelva el derecho del otorgante en virtud del título anterior no inscrito ó de causas que no resulten claramente del mismo Registro, ó si la inscripción se hubiere notificado ó hecho saber á las personas que en los veinte años anteriores hayan poseído, según el Registro, los mismos bienes, y no hubieren reclamado contra ella en el término de treinta días.

La notificación á que se refiere el párrafo anterior se verificará á solicitud del que, según el Registro, sea dueño del inmueble ó del derecho real, por el mismo Registrador, verbalmente ó por escrito, á los anteriores adquirentes que tuviesen registrado su derecho y residan en el territorio del Registro, y por edictos á los que se hallen ausentes ó no sean conocidos, y á los herederos de los que hayan fallecido.

Los requeridos de cualquiera de estos modos que en el término de treinta días no presenten en el Juzgado ó Tribunal correspondiente demanda que pueda invalidar la inscripción notificada, no podrán hacer valer su derecho, si alguno tuviesen, contra el tercero que inscriba después el suyo en la forma debida sobre la misma finca, aunque la inscripción anterior proceda de un título falso ó nulo.

La notificación personal se verificará dejando en poder del requerido un breve extracto de la parte de la inscripción que pueda interesarle, recogiendo recibo de ella; ó si esto no fuere posible, extendiendo el mismo Registrador una diligencia de entrega. Si el requerido contestase verbalmente que no tiene reclamación que hacer, ó dejare transcurrir el término de los treinta días sin traer al Registro documento que acredite la presentación de su demanda, el Registrador lo hará constar también por diligencia. Cuando el requerido contestase por escrito, será este firmado de su puño, y el Registrador lo conservará en su archivo.

Los edictos, en su caso, se publicarán y fijarán por el Registrador en los parajes acostumbrados del lugar en que radique la finca, y del pueblo del Registro y en el Boletín oficial de la provincia.

Si en los treinta días señalados no se entablare demanda que pueda dejar sin efecto la inscripción, el Registrador, ocho días después, pondrá en esta una nota marginal expresando aquel resultado. En cualquiera otro caso no se extenderá dicha nota hasta que sea vencido en juicio

el anterior requirente que hubiera reclamado contra la inscripción.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable á la inscripción de la mera posesión, á menos que la prescripción haya convalidado y asegurado el derecho inscrito.

Art. 35. La prescripción que no requiera justo título no perjudicará á tercero si no se halla inscrita la posesión que ha de producirla.

Tampoco perjudicará á tercero la que requiera justo título si este no se halla inscrito en el Registro.

El término de la prescripción principiará á correr, en uno y otro caso, desde la fecha de la inscripción.

En cuanto al dueño legítimo del inmueble ó derecho que se esté prescribiendo, se calificará el título y se contará el tiempo con arreglo á la legislación común.

Art. 36. Las acciones rescisorias y resolutorias no se darán contra tercero que haya inscrito los títulos de sus respectivos derechos, conforme á lo prevenido en esta ley.

Art. 37. Se exceptúan de la regla contenida en el artículo anterior:

Primero. Las acciones rescisorias y resolutorias que deban su origen á causas que consten explícitamente en el Registro.

Segundo. Las acciones rescisorias de enajenaciones hechas en fraude de acreedores en los casos siguientes:

Cuando la segunda enajenación haya sido hecha por título gratuito.

Cuando el tercero haya sido cómplice en el fraude.

En ambos casos prescribirá la acción al año, contando desde el día de la enajenación fraudulenta.

Art. 38. En consecuencia de lo dispuesto en el art. 36, no se anularán ni rescindirán los contratos en perjuicio de tercero que haya inscrito su derecho por ninguna de las causas siguientes:

Primera. Por revocación de donaciones, en los casos permitidos por la ley, excepto el de no cumplir el donatario condiciones inscritas en el Registro.

Segunda. Por causa de retracto legal en la venta ó derecho de tanteo en la enfiteusis.

Tercera. Por no haberse pagado todo ó parte del precio de la cosa vendida, si no consta en la inscripción haberse aplazado el pago.

Cuarta. Por la doble venta de una misma cosa cuando alguna de ellas no hubiere sido inscrita.

Quinta. Por causa de lesión enorme ó enormísima.

Sexta. Por efecto de la restitución *in integrum* á favor de los que disfrutaban este beneficio.

Sétima. Por enajenaciones verificadas en fraude de acreedores, con exclusión de las exceptuadas en el artículo anterior.

Octava. Por efectos de cualesquiera otras acciones que las leyes ó fueros especiales concedan á determinadas personas para rescindir contratos en virtud de causas que no consten expresamente de la inscripción.

En todo caso en que la acción resolutoria ó rescisoria no se pueda dirigir contra el tercero, conforme á lo dispuesto en este artículo, se podrá ejercitar la personal correspondiente para la indemnización de daños y perjuicios por el que los hubiese causado.

Art. 39. Se entenderá enajenación á título gratuito en fraude de acreedores en el caso primero, número segundo del art. 37, no solamente la que se haga por donación ó cesión de derecho, sino también cualquiera enajenación, constitución ó renuncia de derecho real que haga el deudor en los plazos respectivamente señalados por las leyes comunes, y las de comercio en su caso, para la revocación de las enajenaciones en fraude de acreedores, siempre que no haya mediado precio, su equivalente ú obligación preexistente y vencida.

Art. 40. Se podrán revocar, conforme á lo declarado en el artículo anterior, y siempre que concurren las circunstancias que en él se determinan:

Primero. Los censos, enfiteusis, servidumbres, usufructos y demás derechos reales constituidos por el deudor.

Segundo. Las constituciones dotales ó donaciones *propter nuptias* á favor de la mujer, de hijos ó de extraños.

Tercero. Las adjudicaciones de bienes inmuebles en pago de deudas no vencidas.

Cuarto. Las hipotecas voluntarias constituidas para la seguridad de deudas anteriormente contraídas sin esta garantía, y no vencidas, siempre que no se agraven por ella las condiciones de la obligación principal.

Quinto. Cualquier contrato en que el deudor traspase ó renuncie expresa ó tácitamente un derecho real.

Se entenderá que no media precio ni su equivalente en los dichos contratos cuando el Notario no dé fé de su entrega, ó si confesando los contrayentes haberse esta verificado con anterioridad no se justifique el hecho ó se probare que debe ser comprendido en el caso tercero del presente artículo.

Art. 41. Se considerará el poseedor del inmueble ó derecho real cómplice en el fraude de su enajenación, en el caso segundo, número segundo del art. 37:

Primero. Cuando se probare que le constaba el fin con que dicha enajenación se hiciera, y que coadyuvó á ella como adquirente inmediato, ó con cualquier otro carácter.

Segundo. Cuando hubiere adquirido su derecho, bien inmediatamente del deudor, bien de otro poseedor posterior, por la mitad ó menos de la mitad del justo precio.

Tercero. Cuando habiéndose cometido cualquiera especie de suposición ó simulación en el contrato celebrado por el deudor se probare que el poseedor tuvo noticia ó se aprovechó de ella.

TITULO III.

De las anotaciones preventivas.

Art. 42. Podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos derechos en el Registro público correspondiente:

Primero. El que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles, ó la constitución, declaración, modificación ó extinción de cualquier derecho real.

Segundo. El que en juicio ejecutivo obtuviere á su favor mandamiento de embargo, que se haya hecho efectivo en bienes raíces del deudor.

Tercero. El que en cualquier juicio obtuviere sentencia ejecutoria condenando al demandado, la cual deba llevarse á efecto por los trámites establecidos en el tit. XVIII, parte primera de la ley de Enjuiciamiento civil.

Cuarto. El que demandando en juicio ordinario el cumplimiento de cualquiera obligación obtuviere, con arreglo á las leyes, providencia ordenando el secuestro ó prohibiendo la enajenación de bienes inmuebles.

Quinto. El que propusiere demanda con objeto de obtener alguna de las providencias expresadas en el número cuarto del art. 2.º de esta ley.

Sexto. El legatario que no tenga derecho, según las leyes, á promover el juicio de testamentaria.

Sétimo. El acreedor refaccionario, mientras duren las obras que sean objeto de la refacción.

Octavo. El que presentare en el oficio del Registro algún título cuya inscripción no pueda hacerse definitivamente por falta de algún requisito subsanable ó por imposibilidad del Registrador.

Noveno. El que en cualquiera otro caso tuviere derecho á exigir anotación preventiva, conforme á lo dispuesto en esta ley.

Art. 43. En el caso del número pri-

mero del artículo anterior, no podrá hacerse la anotación preventiva sino cuando se ordene por providencia judicial, dictada á instancia de parte legítima, y en virtud de documento bastante al prudente arbitrio del Juzgador.

En el caso del número segundo del mismo artículo, será obligatoria la anotación, según lo dispuesto en el 953 de la ley de Enjuiciamiento civil.

En el caso del número quinto de dicho artículo anterior, deberá hacerse también la anotación en virtud de providencia judicial, que podrá dictarse de oficio cuando no hubiere interesados que la reclamen, siempre que el Juzgador, á su prudente arbitrio, lo estime conveniente para asegurar el efecto de la sentencia que pueda recaer en el juicio.

Art. 44. El acreedor que obtenga anotación á su favor en los casos de los números segundo, tercero y cuarto del art. 42 será preferido, en cuanto á los bienes anotados solamente, á los que tengan contra el mismo deudor otro crédito contraído con posterioridad á dicha anotación.

Art. 45. El legatario que no tenga derecho, según las leyes, á promover el juicio de testamentaria, podrá pedir en cualquier tiempo anotación preventiva sobre la misma cosa legada, si fuere determinada ó inmueble.

Si el legado no fuere de especie, podrá exigir el legatario la anotación de su valor sobre cualesquiera bienes raíces de la herencia, bastantes para cubrirlo dentro de los ciento ochenta días siguientes á la muerte del testador.

En uno y otro caso se hará la anotación, presentando en el Registro el título en que se funde el derecho del legatario.

Art. 46. El legatario de bienes inmuebles determinados ó de créditos ó pensiones consignados sobre ellos no podrá constituir su anotación preventiva, sino sobre los mismos bienes.

Art. 47. El legatario de género ó cantidad no podrá exigir su anotación sobre bienes inmuebles legados especialmente á otro.

Art. 48. Ningun legatario de género ó cantidad que tenga á su favor anotación preventiva podrá impedir que otro de la misma clase obtenga, dentro del plazo legal, otra anotación á su favor sobre los mismos bienes ya anotados.

Art. 49. Si el heredero quisiere inscribir á su favor, dentro del expresado plazo de los ciento ochenta días, los bienes hereditarios, y no hubiere para ello impedimento legal, podrá hacerlo con tal de que renuncien previamente y en escritura pública todos los legatarios á su derecho de anotación, ó que en defecto de renuncia expresa se notifique á los mismos legatarios, con treinta días de anticipación, la solicitud del heredero á fin de que durante dicho término puedan hacer uso de aquel derecho.

Esta notificación se hará con arreglo á lo dispuesto en los artículos 228, 229, 230 y 231 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Si alguno de los legatarios no fuere persona cierta, el Juez ó Tribunal mandará hacer la anotación preventiva de su legado, bien á instancia del mismo heredero ó de otro interesado, bien de oficio.

El heredero que solicitare la inscripción á su favor de los bienes hereditarios, dentro de los referidos ciento ochenta días, podrá anotar preventivamente desde luego dicha solicitud.

Esta anotación no se convertirá en inscripción definitiva hasta que los legatarios hayan renunciado, expresa ó tácitamente, á la anotación de sus legados; y quedará cancelada respecto á bienes que los mismos legatarios anoten preventivamente en uso de su derecho.

Art. 50. El legatario que obtuviere anotación preventiva será preferido á los acreedores del heredero que haya aceptado la herencia sin beneficio de inventario, y á cualquiera otro que con poste-

rioridad á dicha anotación adquiere al-
gun derecho sobre los bienes anotados;
pero entendiéndose que esta preferencia
es solamente en cuanto al importe de di-
chos bienes.

Art. 51. La anotación preventiva dará
preferencia, en cuanto al importe, de los
bienes anotados, á los legatarios que ha-
yan hecho uso de su derecho dentro de
los 180 días señalados en el art. 45 sobre
los que no lo hicieron del suyo en el
mismo término.

Los que dentro de éste la hayan reali-
zado no tendrán preferencia entre sí; pero
sin perjuicio de la que corresponda al le-
guario de especie respecto á los demás
legatarios, con arreglo á la legislación co-
mún, tanto en este caso, como en el de
no haber pedido su anotación.

Art. 52. El legatario que no lo fuese
de especie y dejare transcurrir el plazo se-
ñalado en el art. 45 sin hacer uso de su
derecho, solo podrá exigir después la
anotación preventiva sobre los bienes de
la herencia que subsistan en poder del
heredero; pero no surtirá efecto contra
el que antes haya adquirido ó inscrito al-
gun derecho sobre los bienes heredi-
tarios.

Art. 53. El legatario que trascurri-
dos los 180 días pidiere anotación sobre
los bienes hereditarios que subsistan en
poder del heredero, no obtendrá por ello
preferencia alguna sobre los demás lega-
tarios que omitan esta formalidad, ni lo-
grará otra ventaja que la de ser antepues-
to para el cubro de su legado á cualquiera
acreedor del heredero que con posteriori-
dad adquiere algún derecho sobre los
bienes anotados.

Art. 54. La anotación pedida fuera
del término podrá hacerse sobre bienes
anotados dentro de él á favor de otro le-
guario, siempre que subsistan en poder
del heredero; pero el legatario que la ob-
tuviera no cobrará su legado, sino en
cuanto alcanzare el importe de los bienes,
después de satisfechos los que dentro del
término hicieron su anotación.

Art. 55. La anotación preventiva de
los legados y de los créditos refaccionar-
ios no se decretará judicialmente sin
audiencia previa y sumaria de los que
puedan tener interés en contradecirla.

Art. 56. La anotación preventiva de
los legados podrá hacerse por convenio
entre las partes ó por mandato judicial.

Art. 57. Cuando hubiere de hacerse
la anotación por mandato judicial, acu-
dirá el legatario al Juez ó Tribunal com-
petente para conocer de la testamentaria
exponiendo su derecho, presentando los
títulos en que se funde, y señalando los
bienes que pretenda anotar. El Juez ó
Tribunal, oyendo al heredero y al mismo
legatario en juicio verbal, según los trá-
mites establecidos en el título XXIV, par-
te primera de la ley de Enjuiciamiento
civil, dictará providencia, bien denegando
la pretensión, ó bien accediendo á ella.

En este último caso señalará los bienes
que hayan de ser anotados y mandará li-
brar el correspondiente despacho al Re-
gistrador, con inserción literal de lo pre-
venido para que lo ejecute.

Esta providencia será apelable para
ante la Audiencia del distrito.

Art. 58. Si pedida judicialmente la
anotación por un legatario acudiere otro
ejercitando igual derecho respecto á los
mismos bienes, será también oído en el
juicio.

Art. 59. El acreedor refaccionario
podrá exigir anotación sobre la finca re-
faccionada por las cantidades que de una
vez ó sucesivamente anticipare, presen-
tando el contrato por escrito que en cual-
quiera forma legal haya celebrado con el
deudor.

Esta anotación surtirá, respecto al cré-
dito refaccionario, todos los efectos de la
hipoteca.

Art. 60. No será necesario que los
títulos en cuya virtud se pida la anota-
ción preventiva de créditos refaccionar-
ios determinen fijamente la cantidad de

dinero ó efectos en que consistan los
mismos créditos, y bastará que contien-
gan los datos suficientes para liquidarlos
al terminar las obras contratadas.

Art. 61. Si la finca que haya de ser
objeto de la refacción estuviere afectá á
obligaciones reales inscritas, no se hará
la anotación, sino bien en virtud de con-
venio unánime por escritura pública en-
tre el propietario y las personas á cuyo
favor estuviere constituidas dichas obli-
gaciones, sobre el objeto de la refacción
misma y el valor de la finca antes de em-
pezar las obras, ó bien en virtud de pro-
videncia judicial, dictada en expediente
instruido para hacer constar dicho valor,
y con citación de todas las indicadas per-
sonas.

Art. 62. Si alguno de los que tuvie-
ren á su favor las obligaciones reales ex-
presadas en el artículo anterior, no fuere
persona cierta, estuviere ausente, igno-
rándose su paradero, ó negare su con-
sentimiento, no podrá hacerse la anota-
ción sino por providencia judicial.

Art. 63. El valor que en cualquier
forma se dae á la finca que ha de ser re-
faccionada antes de empezar las obras se
hará constar en la anotación del crédito.

Art. 64. Las personas á cuyo favor
estuvieren constituidos derechos reales
sobre la finca refaccionada, cuyo valor se
haga constar en la forma prescrita en los
artículos precedentes, conservarán su de-
recho de preferencia respecto al acre-
dor refaccionario, pero solamente por un va-
lor igual al que se hubiere declarado á la
misma finca.

El acreedor refaccionario será consi-
derado como hipotecario respecto á lo
que exceda el valor de la finca al de las
obligaciones anteriores mencionadas, y
en todo caso respecto á la diferencia en-
tre el precio dado á la misma finca antes
de las obras y el que alcanzare en su
enajenación judicial.

Art. 65. Serán faltas subsanables las
que afecten á la validez del mismo título
sin producir necesariamente la nulidad
de la obligación en él constituida.

Si el título contuviere alguna de estas
faltas, el Registrador suspenderá la ins-
cripción, y extenderá anotación preven-
tiva si la solicita el que presentó el título.

Serán faltas no subsanables las que
produzcan necesariamente la nulidad de
la obligación.

En el caso de contener el título alguna
falta de esta clase se denegará la inscrip-
ción sin poder verificarse la anotación
preventiva.

Art. 66. Los interesados podrán re-
clamar gubernativamente contra la cali-
ficación del título hecha por el Registrador,
sin perjuicio de acudir si quieren á los
Tribunales de justicia para ventilar y
contender entre sí acerca de la validez
ó nulidad de los documentos ó de la
obligación. En el caso de que se suspen-
diera la inscripción por faltas subsana-
bles del título y no se solicitare la anota-
ción preventiva, podrán los interesados
subsana las faltas en los treinta días que
duran los efectos del asiento de presenta-
ción. Si se extingue la anotación preven-
tiva, podrá verificarse en el tiempo que
esta subsiste, según el art. 96.

Cuando se hubiere denegado la ins-
cripción y el interesado, dentro de los
treinta días siguientes al de la fecha del
asiento de presentación, propusiera de-
manda ante los Tribunales de justicia pa-
ra que se declare la validez del título ó
de la obligación, podrá pedir anotación
preventiva de la demanda, y la que se
verifique se retrotraerá á la fecha del
asiento de presentación.

Después de dicho término no surtirá
efecto la anotación preventiva de la de-
manda sino desde su fecha.

En el caso de recurrirse gubernativa-
mente contra la calificación del título,
todos los términos expresados en los dos
anteriores párrafos quedarán suspensos
desde el día en que se interponga el re-
curso hasta el de su resolución definitiva.

Art. 67. En el caso de hacerse la
anotación por no poderse ejecutar la
inscripción por falta de algún requisito
subsancable, podrá exigir el interesado
que el Registrador le dé copia de dicha
anotación, autorizada con su firma, y en
la cual conste si hay ó no pendientes de
Registro algunos otros títulos relativos al
mismo inmueble, y cuales sean estas en
su caso.

Art. 68. Las providencias decretan-
do ó denegando la anotación preventiva
en los casos primero, quinto y sexto del
art. 42, serán apelables en un solo efecto.

En el caso séptimo del mismo artículo
será apelable en ambos la providencia
cuando se haya opuesto á la anotación el
que tuviere á su favor algún derecho real
anterior sobre el inmueble anotado.

Art. 69. El que pudiendo pedir la
anotación preventiva en un derecho de-
jado de hacerlo dentro del término seña-
lado al efecto no podrá después ascri-
birlo á su favor en perjuicio de tercero
que haya inscrito el mismo derecho, ad-
quiriéndolo de persona que aparezca en
el Registro con facultad de transmitirlo.

Art. 70. Cuando la anotación pre-
ventiva de un derecho se convierta en
inscripción definitiva del mismo, surtirá
esta sus efectos desde la fecha de la
anotación.

Art. 71. Los bienes inmuebles ó de-
rechos reales anotados podrán ser enaje-
nados ó gravados, pero sin perjuicio del
derecho de la persona á cuyo favor se
haya hecho la anotación.

Art. 72. Las anotaciones preventivas
comprenderán las circunstancias que exi-
gen para las inscripciones los artículos
9.º, 10, 11, 12 y 13 en cuanto resulten
de los títulos ó documentos presentados
para exigir las mismas anotaciones.

Los que deban su origen á providencia
de embargo ó secuestro, expresarán la
causa que haya dado lugar á ellos, y el
importe de la obligación que los hubiere
originado.

Art. 73. Todo mandamiento judicial
disponiendo hacer una anotación preven-
tiva, expresará las circunstancias que
deba ésta contener, según lo prevenido
en el artículo anterior, si resultasen de
los títulos y documentos que se hayan
tenido á la vista para dictar la providen-
cia de anotación.

Cuando la anotación deba comprender
todos los bienes de una persona, como
en los casos de incapacidad y otros aná-
logos, el Registrador anotará todos los
que se hallen inscritos á su favor.

También podrán anotarse en este caso
los bienes no inscritos, siempre que el
Juez ó el Tribunal lo ordene y se haga
previamente su inscripción á favor de la
persona gravada por dicha anotación.

Art. 74. Si los títulos ó documentos
en cuya virtud se pida judicial ó extraju-
dicialmente la anotación preventiva no
contuvieren las circunstancias que esta
necesite para su validez, se consignarán
dichas circunstancias por los interesados
en el escrito en que de común acuerdo
soliciten la anotación. No habiendo ave-
nencia, el que solicite la anotación con-
signará en el escrito en que la pida di-
chas circunstancias, y previa audiencia
del otro interesado, sobre su exactitud,
el Juez ó el Tribunal decidirá lo que pro-
ceda.

Art. 75. Las anotaciones preventivas
se harán en el mismo libro en que cor-
respondería hacer la inscripción si el de-
recho anotado se convirtiere en derecho
inscrito.

Art. 76. La anotación preventiva se-
rá nula cuando por ella no pueda venirse
en conocimiento de la finca ó derecho
anotado, de la persona á quien afecte la
anotación ó de la fecha de esta.

TITULO IV.

De la extinción de la inscripción y
anotación preventiva.

Art. 77. Las inscripciones no se ex-

tinguen en cuanto á tercero sino por su
cancelación ó por la inscripción de la
transferencia del dominio ó derecho real
inscrito á favor de otra persona.

Art. 78. La cancelación de las ins-
cripciones y anotaciones preventivas po-
drá ser total ó parcial.

Art. 79. Podrá pedirse y deberá or-
denarse en su caso la cancelación total:

Primero. Cuando se extinga por com-
pleto el inmueble objeto de la inscripción.

Segundo. Cuando se extinga también
por completo el derecho inscrito.

Tercero. Cuando se declare la nuli-
dad del título en cuya virtud se haya he-
cho la inscripción.

Cuarto. Cuando se declare la nulidad
de la inscripción por falta de alguno de
sus requisitos esenciales, conforme á lo
dispuesto en el art. 30.

Art. 80. Podrá pedirse y deberá decre-
tarse, en su caso, la cancelación parcial:

Primero. Cuando se reduzca el in-
mueble objeto de la inscripción ó anota-
ción preventiva.

Segundo. Cuando se reduzca á dere-
cho inscrito á favor del dueño de la fin-
ca gravada.

Art. 81. La ampliación de cualquier
derecho inscrito será objeto de una nueva
inscripción, en la cual se hará referencia
de la del derecho ampliado.

Art. 82. Las inscripciones ó anota-
ciones preventivas, hechas en virtud de
escritura pública, no se cancelarán sino
por providencia ejecutoria contra la cual
no se halle pendiente recurso de casa-
ción, ó por otra escritura ó documento
auténtico, en el cual espresese su consen-
timiento para la cancelación la persona á
cuyo favor se hubiere hecho la inscrip-
ción ó anotación, ó sus causa-habientes
ó representantes legítimos.

Las inscripciones ó anotaciones, he-
chas en virtud de mandamientos judicia-
les, no se cancelarán sino por providen-
cia ejecutoria que tenga las circunstancias
prevénidas en el párrafo anterior. Las
inscripciones de hipotecas, constituidas
con el objeto de garantizar títulos tras-
misibles por endoso, se cancelarán pre-
sentándose la escritura otorgada por los
que hayan cobrado los créditos, en la
cual deba constar haberse inutilizado en
el acto de su otorgamiento los títulos en-
dosables; ó solicitud firmada por dichos
interesados y por el deudor, á la cual se
acompañen taladrados los referidos títu-
los. Si algunos de ellos se hubiere extra-
viado, se presentará con la escritura ó
con la solicitud testimonio de la declara-
ción judicial de no tener efecto. El Re-
gistrador deberá asegurarse de la identi-
dad de las firmas y de las personas que
hubieren hecho la solicitud.

Las inscripciones de las hipotecas cons-
tituidas con el objeto de garantizar tí-
tulos al portador no podrán cancelarse
sino presentándose testimonio de la de-
claración judicial de quedar extinguidas
todas las obligaciones aseguradas.

En el caso del párrafo anterior, para
decretarse la declaración judicial deberán
preceder cuatro llamamientos por edic-
tos públicos y en los periódicos oficiales,
y tiempo cada uno de ellos de seis me-
ses á los que tuvieran derecho á oponer-
se á la cancelación.

Art. 83. Si constituida una inscrip-
ción ó anotación por providencia judi-
cial convinieren válidamente los intere-
sados en cancelarla, acudirán al Juez ó al
Tribunal competente por medio de un
escrito manifestándolo así; y después de
ratificarse en su contenido, si no hubiere
ni pudiere haber perjuicio para tercero,
se dictará providencia ordenando la can-
celación.

También dictará el Juez ó el Tribunal
la misma providencia cuando sea proce-
dente, aunque no consienta en la cance-
lación la persona en cuyo favor se hu-
biere hecho.

(Se continuará.)

Imp. de D. Gregorio Rionegro Lozano y C.
Plaza del Hierro núm. 3.

VII.

El Gobierno, con vista del dictámen de la Junta, resolverá lo que estime procedente.

En el caso de que considerare que es conveniente la ampliacion de los datos reunidos, podrá decretarlo así, oyendo despues nuevamente á la Junta para la resolucion definitiva.

VIII.

Mientras existan cesantes de la carrera judicial, que hubieren sido declarados merecedores de volver á ella, se añadirá un turno mas respecto á los Magistrados, y dos respecto á los Jueces, de los señalados en cada clase para ingreso ó ascenso. En igualdad de circunstancias serán preferidos los que disfruten cesantía.

IX.

Para la debida ejecucion de lo dispuesto en la regla anterior, se revisarán los expedientes de los cesantes con sujecion á las reglas establecidas para los actuales Jueces y Magistrados.

X.

Los que antes de la promulgacion de esta ley hubiesen obtenido y desempeñado en propiedad en el Ministerio de Gracia y Justicia plaza de número que por disposicion expresa les diere categoría y derecho para obtener cargos judiciales, conservarán su derecho y serán nombrados segun su antigüedad, previa la calificación de sus expedientes, en las vacantes que ocurran de su respectiva clase.

Los empleos que se obtuvieren en el Ministerio de Gracia y Justicia despues de la promulgacion de esta ley no darán opcion ni derecho para ingresar ni ascender en la carrera judicial.

XI.

Desde la promulgacion de esta ley no se proveerán Relatorias ni Escribanías de Cámara. Pero continuarán desempeñándolas sus actuales poseedores.

Las Escribanías de Cámara se irán incorporando á las Relatorias segun fueren vacando.

Para las Relatorias que vacaren se nombrarán Letrados que habrán de desempeñar las funciones de Relator hasta que vacue alguna Escribanía de Cámara á que pueda unirse la Relatoria, constituyéndose entonces la Secretaría de Sala, en cuyo caso el Relator entrará á desempeñar las funciones del nuevo cargo.

Para obtener entre tanto las Relatorias vacantes se necesitarán las mismas condiciones que la ley establece para las Secretarías de Sala de la misma clase.

No son aplicables las reglas precedentes á las Relatorias y á las Escribanías de Cámara cuyas vacantes se hallaban anunciadas y corriendo el plazo para la presentacion de opositores, quienes las obtendrán con sujecion á las reglas y con todos los derechos vigentes en el dia en que se hizo la convocatoria.

XII.

Hasta que se plantee la presente ley, los Relatores y Escribanos de Cámara que hoy existen en las Audiencias continuarán actuando en las Salas de lo civil y lo criminal, y percibirán los derechos de Arancel.

XIII.

Los Relatores y Escribanos de Cámara del Tribunal Supremo actuarán en la Sala primera.

En las demas Salas habrá Secretarios con dotacion fija. Los derechos de Arancel se satisfarán en papel.

XIV.

Para fijar segun esta ley la nueva categoría de los Jueces actuales y cesantes se considerará:

A los Jueces de entrada como Jueces de instruccion.

A los Jueces de ascenso como Jueces de Tribunales de partido de ingreso.

A los Jueces de término como Presidentes de los Tribunales de partido de ingreso, ó Jueces de Tribunales de partido de ascenso.

Los Promotores fiscales de entrada y de ascenso actuales y cesantes podrán ser nombrados Jueces de instruccion.

Los de término podrán ser nombrados Jueces de Tribunales de partido de ingreso.

XV.

Continuarán ejerciendo sus funciones los Cancilleres registradores ó Tasadores, donde los hubiere.

Cuando vacaren estas plazas, quedarán suprimidas.

XVI.

Los Escribanos de los Juzgados de primera instancia de poblaciones en que se establezca Tribunal de partido continuarán desempeñando su cargo en el Tribunal que se erija en la misma poblacion.

No tendrán derecho á ser promovidos en concurrencia con los de oposicion.

Las vacantes que ocurran se proveerán de conformidad con lo que establece esta ley.

XVII.

Los Escribanos de los Juzgados ó Tri-

bunales suprimidos ó que se supriman en virtud de esta ley, que no fueren Notarios ó que hubieren renunciado las Notarías, tendrán opcion á ser colocados en plazas análogas á las que desempeñaren, no habiendo justa causa que lo impida. Los que optaren por permanecer en los pueblos de los Juzgados donde estaban como Secretarios de Juzgados de instruccion serán preferidos para estos cargos, no habiendo justa causa que lo impida. Cesarán los Escribanos de diligencias.

Los actuales y los que lo hubieren sido en Juzgados y Tribunales suprimidos podrán optar á plaza de Oficiales de Sala sin necesidad de nuevo examen.

XVIII.

La Sala primera del Tribunal Supremo conocerá:

De los pleitos anteriores al real decreto de 4 de Noviembre de 1838, que eran de la competencia del Tribunal en aquella época y se hallaren todavia pendientes.

De los recursos de injusticia notoria en materia mercantil que hubiesen sido interpuestos antes del decreto del Gobierno Provisional de 6 de Diciembre de 1868 y se hallaren todavia pendientes.

De los pleitos en que estaba entendiendo el Consejo de Castilla al tiempo de su extincion, que no estuvieren aun terminados.

Palacio de las Cortes treinta de Agosto de mil ochocientos setenta.—Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.—Manuel de Llano y Persi, Diputado Secretario.—Julian Sanchez Ruano, Diputado Secretario.—Francisco Javier Carratalá, Diputado Secretario.—Mariano Rius Montaner, Diputado Secretario.

Madrid quince de Setiembre de mil ochocientos setenta.—El Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Rios.